

LA DEMOCRACIA CRISTIANA FRENTE AL AUTORITARISMO:

- luchar por la liberación.
- abrir interlocución cívico-militar.
- vivir junto al pueblo.

Dr. Patricio Rojas Saavedra.

Agosto 1984.

(Borrador)

Chile vive un grave momento histórico que compromete su futuro y el destino de todos sus habitantes.

Al cabo de mas de una década de autoritarismo militar el país se presenta azotado por un quiebre económico de gran magnitud y de difícil recuperación. Las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos son hoy todavía inferiores a las de 1970, agravadas por una cesantía masiva y vergonzosa y por una falta de expectativas para amplios sectores ciudadanos.

La experiencia monetarista impulsada por la autocracia militar ha dejado un país hipotecado por una agobiante deuda externa; un sector productivo paralizado por una apertura económica devastadora y abrumado por un alto nivel de endeudamiento y una falta de recursos frescos que permitan una rápida reactivación.

Pero si el quiebre económico y productivo es impresionante, el efecto de la dictadura política se extiende con rasgos alarmantes a la vida social y cultural de la nación. La marginalidad de vida alcanza a cientos de miles de familias que viven en condiciones intolerables de habitación, salubridad y nutrición.

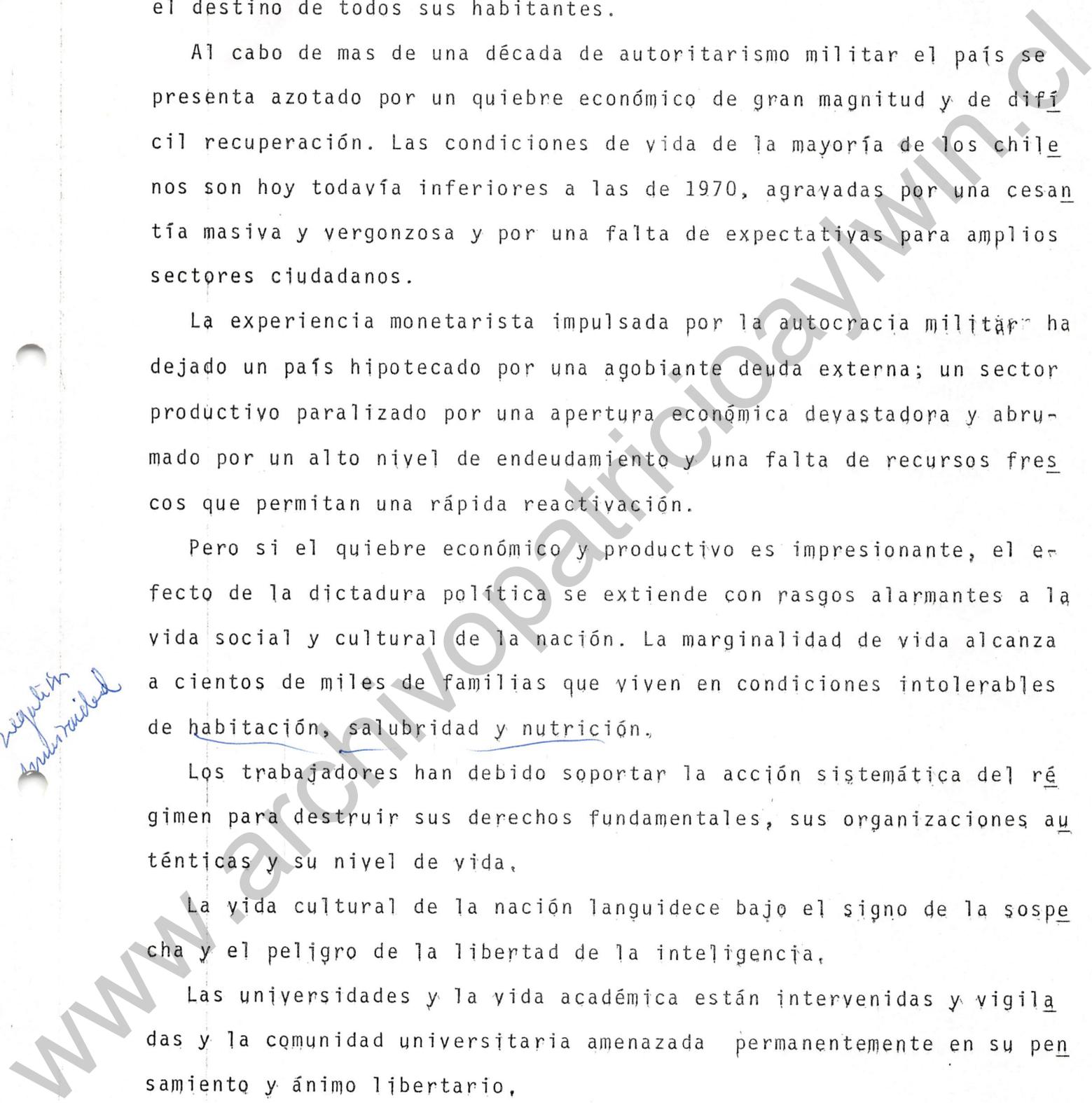
Los trabajadores han debido soportar la acción sistemática del régimen para destruir sus derechos fundamentales, sus organizaciones auténticas y su nivel de vida.

La vida cultural de la nación languidece bajo el signo de la sospecha y el peligro de la libertad de la inteligencia.

Las universidades y la vida académica están intervenidas y vigiladas y la comunidad universitaria amenazada permanentemente en su pensamiento y ánimo libertario.

La mayor tragedia es vivir en un país que no ofrece esperanza ni destino a la juventud.

*negativa
subscritas*



Hoy mas que nunca se puede afirmar que Chile es un país enfermo, derrotado y gravemente dividido.

En estas condiciones verdaderamente críticas toda la nación ejerce su instinto de supervivencia y de búsqueda de solución a sus problemas.

Este es el signo que creemos predomina en la sociedad chilena actual: el país busca la liberación de un régimen fracasado.

Frente a la confusión y desorientación, Chile busca una nueva conducción y un fuerte liderato, orientador, honesto y capaz.

Frente a la división entre chilenos, Chile busca un reencuentro a través del diálogo, la tolerancia y la posibilidad de un gran acuerdo nacional.

Frente a la paralización productiva y a la falta de oportunidades de trabajo, Chile busca una capacidad y un nuevo espíritu para poner en marcha el país.

En esta encrucijada histórica la Democracia Cristiana, fiel a su vocación humanista, nacional y popular debe reafirmar su voluntad de servicio al país y debe contribuir en forma decisiva a formular un camino de salida de nuestro trágico destino actual que, respetando nuestra convivencia, reencauce nuestro porvenir.

En esta búsqueda de un cambio en la conducción del país el nudo central consiste en la confianza pública que despierte ante los chilenos la personalidad, las ideas y las proposiciones concretas que, constituyendo una opción integral, nítida y transparente, capten la adhesión espiritual, moral y política de una mayoría de la nación, que será indispensable conquistar para dar un giro a nuestra historia.

Esta es la magnitud y la naturaleza del esfuerzo que debe tener una nueva acción de la Democracia Cristiana para levantar una propuesta política social y económica atractiva a los chilenos.

En el tiempo que reste la dictadura, durante la lucha por la liberación y al emerger la democracia, el destino del país se jugará en diversas opciones que deberá decidir el pueblo. Quienes hayan dado la mayor evidencia de voluntad y capacidad de lucha por la liberación del autoritarismo, por su testimonio moral y activo en defensa de los derechos humanos y por haber vivido junto al destino de los pobres y los postergados en esta época oscura, conquistarán la voluntad libre y mayoritaria que será indispensable para conducir el país.

Con lo anterior queremos significar nuestro rechazo de toda pretensión de liderazgo ilegítimo o injustificado de nuestra parte respecto de la confianza popular. La validez de nuestra posición y el apoyo que ésta conquiste se obtendrá por los hechos, testimonios y respuestas que seamos capaces de realizar en el tiempo por venir.

La futura acción política de la Democracia Cristiana debe concentrarse precisamente en la construcción de una nueva opción para Chile.

Esta nueva formulación política exige una profunda reflexión en esta hora, que se oriente a la búsqueda de un consenso político al interior del partido demócrata-cristiano. Tal consenso político, una vez alcanzado, debería ofrecerse a la consideración de los demás sectores democráticos y de la ciudadanía en general.

Por nuestra voluntad y vocación democrática hemos señalado a esta hora como una etapa de debate interno, previo a la renovación de directivas. Nuestro compromiso con una militancia y un país expectante es elaborar una proposición realista, orientadora, confiable y eficaz. Este singular esfuerzo debe comprometer el aporte de ideas de todos los sectores partidarios, en una participación intelectual y creativa amplia, que contraste nuestra visión de problemas, prioridades y recomendaciones de conducta política nítida frente a la autocracia militar.

Las observaciones y sugerencias de este documento pretenden ser una contribución a este fin.

Escenario Político 82-84. La experiencia vivida por el acontecer político en estos dos últimos años muestra la ocurrencia de hechos importantes como fueron el fracaso monumental del experimento monetarista y la movilización social que, a través de las protestas nacionales, pusieron en jaque al régimen durante un cierto período. En el mismo sentido, la constitución de la Alianza Democrática representó una acción de concertación política crucial que reforzó la acción opositora, dinamizó la protesta social y alentó esperanzas de cambio.

En estas circunstancias y por un tiempo prolongado, el Gobierno apareció inmovilizado y casi sin rumbo; el general Pinochet se apreciaba deprimido y acosado y la continuación del manejo económico monetarista no ofrecía ninguna solución a corto plazo de los problemas económicos.

Sin embargo, desde este panorama ocurrido entre 1981 y 1983 a la situación actual, hay que reconocer que el cuadro ha cambiado tanto para el gobierno como para la oposición. Como se analiza mas adelante es evidente que la llegada del Ministro Jarpa al Gabinete y el cambio del equipo y de la política económica hicieron recuperar fuerzas y aún confianza al general Pinochet y aglutinaron a su alrededor el sólido respaldo de las instituciones armadas aún frente a casos escandalosos como el de "El Melocotón".

A su vez, en estos meses el país presenció una variedad de noticias, actividades, reuniones y declaraciones de diversos grupos y grupúsculos políticos que a un observador no enterado darían la imagen de una activa y autorizada vida política. En este reducido espacio de actuaciones y de debate político la opinión pública aparece como saturada ante las divisiones, ataques personales, descalificaciones y, sobre todo por el corto alcance y visión de muchos de estos planteamientos.

Todo ésto, sin mencionar el escaso o ningún respaldo popular que podrían alcanzar muchos de estos movimientos a la hora de una verdadera apertura democrática.

En esta nueva babel política actual destaca, aparte la diferencia de lenguajes e intenciones, el hecho que la mayor parte de los contenidos del discurso político civil aparece alejado y aún desinteresado de los problemas reales de tipo social y económico que vive hoy en día la mayor parte del pueblo chileno.

En estas condiciones hay buenas razones para creer que la mayoría silenciosa de Chile no esté interesada ni en estas actuaciones de cúpulas políticas ni en el contenido detallado de la ley de partidos políticos o en las opciones del sistema electoral futuro.

Por similares razones creemos que existe apatía ciudadana en lo que se refiere a la búsqueda de concertaciones, reuniones o acuerdos entre diversos grupos políticos y, en especial, en los llamados públicos de sectores izquierdistas que pretenden hegemonizar la crítica y la protesta social, sin abandonar su apoyo a la violencia y aún al terrorismo.

Al panorama anterior hay que añadir una observación frecuente acerca de la actual situación política como es una cierta desmovilización en la acción opositora que se debe hacer frontal y continuamente a un régimen que se endurece día a día. En este sentido, debemos recoger la expresión de un ánimo público que señala que de parte del PDC ha existido en el último tiempo una suerte de quietud frente a algunos hechos creados por la dictadura. Desde el ámbito económico, que ha adoptado medidas que harán pagar la cuenta y el sacrificio

mejos
aparte b
7. apoyo
su la violencia

WWW.archivopatriaymilitar.cl

ficio a todos los chilenos, pasando por la fórmula adoptada para la licitación de la banca intervenida y la cláusula de reajustar sueldos y salarios por debajo del IPC convenida con el FMI, hasta llegar a las recientes leyes de prensa, antiterrorista y la legalización de las acciones de la CNI, muchos chilenos extrañan la ausencia de una palabra terminante y de una postura orientadora de la Democracia Cristiana. En el plano político, la recaída de autoritarismo expresado por el discurso actual del general Pinochet de que no habrá plebiscito ni Congreso anticipado y que se cumplirá la Constitución del 80 sin alteraciones, así como por las declaraciones del Ministro Jarpa que evidencian el total rechazo de cualquier apertura y aún anuncian el proyecto de creación de un movimiento político de apoyo al Gobierno, no despiertan reacciones de parte de la Democracia Cristiana que den la imagen de un grupo opositor duro, denunciante y crítico, dotado de rápidos reflejos para la réplica política.

En base a estos elementos, o sea la posición actual del Gobierno y sus posibilidades económicas y políticas, la actividad y el debate político actual y sus efectos en la mayoría de la población y la necesidad de una reactivación de la imagen y personalidad de la Democracia Cristiana como líder y alternativa principal de la oposición, debería construirse la nueva propuesta de estrategia y acción de los demócrata-cristianos en los duros tiempos que se avecinan.

El Gobierno y su estrategia. Como se indicó inicialmente el Gobierno, luego de un período de inmovilización y falta de rumbo por la crisis económica y la persistencia del manejo económico monetarista muestra hoy un rebrote de confianza y una recaída al autoritarismo que rigidiza y aleja cualquier posibilidad de apertura y aún de diálogo. Esta vuelta al poder omnímodo está basada en una errónea percepción de los resultados de la actual política económica, en la disminución de

la presión social provocada por las protestas nacionales y en la consolidación del respaldo de las instituciones armadas a la persona del general Pinochet y a la Constitución de 1980.

Confundiendo la actual quietud ciudadana con apoyo y la expectativa de algún progreso económico, que aún no se evidencia, con confianza en sus políticas, el régimen se inclina decididamente hacia una regresión del manejo del país mediante dictado, sin participación ni apelación posible a sus determinaciones.

La mayor expresión de esta reiteración autoritaria corresponde, como siempre, al general Pinochet. En su discurso actual es evidente su regreso al uso totalitario del poder, a su ostentación autocrática y a la vuelta a la inflexibilidad en el cumplimiento de lo que él denomina "itinerario político de la Constitución del 80". No existe de su parte ánimo alguno de modificar la Constitución autodictada ni menos aún de aceptar la idea de un Congreso anticipado para 1986.

En este cuadro destaca como un signo de especial gravedad en esta oleada autoritaria la reiteración pública y contumaz del compromiso y de la responsabilidad de los Comandantes en Jefe de las instituciones armadas en muchas acciones de esta hora. Es el caso de la dictación de la llamada ley antiterrorista que legalizó muchas actividades de la CNI; de las nuevas disposiciones de la Ley de Abusos de Publicidad; de la discusión de las leyes políticas y, más recientemente, su actuación en la contienda de competencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Al realizar este manejo y tener participación decisiva en asuntos de neto carácter político es evidente que las cúpulas militares actuales en la conducción superior del país comprometen a sus instituciones

en los resultados de fracaso económico, crisis social y dictadura política del régimen.

Por estos graves motivos, insoslayables pues las instituciones armadas constituyen el principal centro de fuerza y apoyo del Gobierno, y al persistir sus altos mandos en su actitud pública de respaldo y restricto al gobernante y al régimen, la participación y responsabilidad de estas cúpulas militares se convierte hoy en una cuestión central de cualquier estrategia de acción frente al régimen. Este delicado pero inescapable análisis de la imagen y juicio ciudadano frente a las actuaciones de los mandos militares se desarrolla en capítulo aparte.

Panorama Económico. Junto al frente castrense constituido en el primer elemento de sostén del régimen, el Gobierno centra su estrategia en los resultados del campo económico y de su accionar en el área política.

El campo económico sigue representando el mayor obstáculo de alivio de la tensión social existente en Chile dado el gigantesco fracaso de la experiencia monetarista que el general Pinochet endosó a todo trance y es de su exclusiva responsabilidad.

El cambio del equipo económico y la reorientación de las políticas hacia objetivos reactivadores, dejando atrás las actuaciones y criterios de la gran mayoría de los monetaristas tipo Chicago, ha traído una sensación de alivio a los partidarios del Gobierno, que parecen creer que frente a los formidables problemas de deuda externa y quiebra interna, paralización productiva, baja inversión y elevada cesantía, existen fórmulas mágicas para una rápida recuperación.

La verdad es que el país se presenta aherrojado por un quiebre eco

nómico gravísimo, sin credibilidad ni crédito externo y sometido por los próximos años al marco recesivo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Una breve reseña de la situación económica actual indica que el sector empresarial ha recibido un alivio relativo de su endeudamiento a través de una fórmula que deberán financiar todos los chilenos. Aún así, las empresas productivas no tienen canales para ubicar el nuevo capital de trabajo que resulta indispensable para realizar actividades. A su vez, la normalización de la banca intervenida, que ha consumido fabulosos recursos públicos entregados por el Banco Central, continuará en esta tendencia restando grandes capitales de una orientación más productiva. Además, la fórmula adoptada por el Gobierno de licitar la mayoría de las acciones de este sector bancario, sin mínimo, expondrá el interés y el patrimonio público a toda clase de irregularidades.

Por su parte, la inversión y el gasto que debe realizar el Estado y que todos señalan como crucial en una reactivación dinámica no muestra signos sustantivos de mejoría. El cacareado plan de construcción de 60.000 viviendas en este año no tiene visos de cumplimiento y el gasto social de educación, salud y nutrición mantiene su decaimiento.

Sin embargo, el aspecto más grave de esta política económica actual y futura está dado por los términos suscritos por este Gobierno en el convenio con el FMI. Allí se establece que el gobierno de Chile aplicará una política de reajuste de sueldos y salarios que será inferior al alza de costo de vida. En buen romance, se condena a la masa trabajadora que vive de un sueldo a deteriorar aún más sus limitadas condiciones de vida.

En lo referente al servicio de la abultada deuda externa, provocada y consentida por el régimen, que bendijo la experiencia monetarista y estimuló la acción de los grupos económicos, hay que señalar la posible inminencia de una incapacidad de pago de los intereses y amortizaciones de los próximos años. Asimismo, hay que recordar que el propio Ministro de Hacienda actual ha señalado que el nivel de pago de los intereses de esta formidable deuda "consumirán el crecimiento económico de los próximos cinco años". En otras palabras, no hay nada que esperar por el próximo quinquenio ni de la actividad económica ni en el ingreso personal. Seremos cada día mas pobres y de menor valor como nación.

Como resultado de estas tendencias se puede concluir que lo mas probable es que el régimen militar, llegado el caso de extenderse - hasta 1989 y trás cumplir 16 años de gobierno equivalentes a casi tres períodos presidenciales normales ostentará un fracaso económico que será una verdadera "derrota histórica" de su paso por el poder. Este sería el triste epílogo de los sueños de transformación de la sociedad chilena. El pueblo habrá sido el enemigo al que el régimen habrá castigado con miseria y crisis.

Acción Política del Gobierno. Por casi una década el Gobierno no prestó atención a su actuación en el campo político. Así, el exilio, los desaparecidos, las violaciones de los derechos humanos ocurrieron sin que el régimen prestase cuidado al precio político que nacional e internacionalmente esta conducta y hechos involucraban.

Los partidos políticos "no existían" y la acción política estaba prohibida oficialmente.

Este cuadro llegó a ser crítico en el momento de las protestas del

año 82 y 83 y luego del derrumbe del esquema económico todo lo cual obligó a buscar un conductor del frente político tan menospreciado por quienes gobernaban. Este fue el Ministro Jarpa cuya llegada y permanencia el el Gobierno inició una nueva etapa en la conducción del régimen.

La presencia de un civil con experiencia y manejo del accionar de los partidos políticos abrió expectativas que provocaron una franca distensión en el ambiente nacional. La esperanza de una conciliación, pronto regreso de los exilados e inicio de un diálogo con la Alianza Democrática, alimentaron la esperanza de una apertura del régimen, que se suponía indispensable dada la crítica situación material y la alta tensión social existente en el país.

Sin embargo, el transcurso de los últimos meses ha revelado lo equivocado de los juicios y suposiciones de muchos chilenos respecto de los verdaderos objetivos del Ministerio Jarpa.

Hoy aparece claro que el Jefe de Gabinete ejercitó un juego de entretención y de ganancia de tiempo político en sus reuniones con la Alianza Democrática. En el campo de los procedimientos ha revelado una evidente opción por el autoritarismo en vez del hábito democrático. Su planteamiento de que el país enfrenta una disyuntiva de "democracia o comunismo" soslayando que la realidad de Chile es la opción de "democracia o dictadura" es una maniobra de distracción tendiente a ocultar la consideración del fracaso económico y la rigidez de la dictadura.

Su accionar presente tiende a demostrar al país y, sobretodo, al interior del régimen militar que la oposición política representada por la Alianza Democrática ofrece una "salida inviable" por su rechazo de la Constitución del 80, la petición de renuncia del general

Pinochet, la convocación de una Asamblea Constituyente y por su "indefinición ante el comunismo".

Como esta descalificación decretada por el conductor político del Gobierno crea un "vacío opositor", se levanta desde las esferas oficialistas una nueva opción política a través del denominado Grupo de los Ocho que deviene finalmente en cinco movimientos conformando el ADENA, que recuerda ominosamente el ARENA oficialista brasileño. Con este montaje se pretende la existencia de un accionar político independiente y aún crítico del Gobierno que apoya una fórmula de salida gradual y pacífica.

El fracaso de esta acción está a la vista toda vez que el régimen militar no ^{avale} endosa la idea de un Congreso anticipado ni la realización de un plebiscito que reforme la actual Constitución. Sin embargo, se persiste en la conformación de este pseudo frente político para consumo interno de la mentalidad militar y, en último término, bajo la peregrina y tardía idea de crear un movimiento político que canalice algún respaldo ciudadano hacia el Gobierno.

En síntesis, el régimen ha seguido un accionar político cuyos pasos tácticos se encaminan a un objetivo central; reforzar la estabilidad y el poder del general Pinochet hasta 1989, reimponer la Constitución del 1980 y asegurar al interior de los mandos militares que esta conducción política no conduce a la inestabilidad ni anarquía que se supone a los que piden pronto retorno democrático. Esta actitud de fondo se rubrica con la extrema dureza que se demuestra actualmente para sancionar la real disidencia política regresando al uso frecuente del art. 24 transitorio y a los procesos por Ley de Seguridad Interior del Estado.

La conclusión obligada de este cuadro es que el general Pinochet, las cúpulas militares del régimen y el manejo político del Ministro Jarpa son coincidentes en el rechazo de toda salida democrática antes de 1989, en imponer la Constitución del 80 y en emplear la represión contra la disidencia y la movilización social contraria al régimen.

Elementos para una nueva estrategia y acción de la DC. A la luz del análisis realizado, el país ofrece tres rasgos centrales y determinantes de una nueva estrategia y acción política:

- autoritarismo inflexible aspirando a alcanzar 1989 sin transición ni apertura política;
- compromiso y responsabilidad de las cúpulas militares en el fracaso del régimen;
- deterioro de la situación de vida de millones de chilenos.

Es evidente que la DC chilena no puede aceptar un desenlace ni la prolongación de una experiencia tan negativa y disociadora de nuestra convivencia para el próximo quinquenio. Por el contrario, la Democracia Cristiana debe extraer de este triple escenario, trágico pero real, los objetivos principales de su acción de lucha por lograr un cambio de conducción concertado y pacífico para el país.

Así, frente al hecho real de una dictadura recaída al uso omnímodo del poder, inflexible, represiva y decidida a prolongarse, debe levantarse como el primer objetivo de su lucha política el combate por la liberación del régimen actual.

A su vez, la situación de compromiso y responsabilidad de las cúpulas militares en el fracaso del Gobierno debe constituirse en el segundo objetivo político de la acción de la DC a través de la denuncia, respetuosa pero decidida, de la intervención militar y en la petición

de una interlocución cívico-militar que permita un gran acuerdo nacional.

Por último, el inminente y progresivo deterioro de la situación de vida de millones de chilenos debe volcar a los demócrata-cristianos a "vivir el destino del pueblo con el pueblo"; a defender sus derechos y a buscar soluciones a sus dramáticos problemas de vida, abandonando toda actitud que parezca o corresponda a preocupaciones o ambiciones extemporáneas de tipo político.

Bajo esta triple acción de combate por la liberación de la dictadura, denuncia del compromiso y responsabilidad militar en el fracaso del régimen con petición de una interlocución cívico-militar y de vivencia del destino popular y dedicación a los problemas reales socio-económicos que afectan la vida cotidiana de millones de chilenos, la Democracia Cristiana estará colocándose en una óptica de realismo político combinado con eficacia de acción, honestidad de planteamientos y verdadero servicio popular.

Levantar y sostener con firmeza, sacrificio y valentía esta opción frente al régimen deberá caracterizar nuestra futura acción política ante el país de manera que se perciba su origen e inspiración ideológica en forma nítida.

Combatir por la liberación. La lucha de la Democracia Cristiana por la liberación de la dictadura debe ser frontal, activa e incesante. Esto exige un llamado al sacrificio y a la dureza de parte de todos los demócrata-cristianos. Exige, asimismo, excluir la idea de una democracia fácil, al alcance de la mano. Es un error político que la Democracia Cristiana transmita la imagen de la inminencia, cercanía o facilidad de la apertura democrática o de la transición. Por el contrario,

hay que reiterar que la democracia será el final de un camino duro y combativo y no el producto simple de un triunfalismo verbal que sólo desgasta y frustra la esperanza y la fuerza popular por la liberación.

Por mucho que se anhele la pronta llegada de una transición o de una apertura democrática, el hecho real y violento de la dictadura actual constituye y exige una situación previa de cambio que es anterior al planteamiento y construcción misma de una alternativa democrática. Por ello, y aunque sin cejar en la búsqueda del consenso social necesario para una transición a la democracia, lo primero que se debe hacer en los tiempos por venir será luchar por "mover, conmover y remover la dictadura".

De este modo, el combate por la liberación debe ser un objetivo primero, común y movilizador que deberá adoptar variadas formas y planes de lucha.

Antes de avanzar en ideas y tareas concretas en esta materia, es indispensable reiterar la adhesión de la DC a los métodos pacíficos de lucha y enfrentamiento con el régimen, con expreso rechazo de la violencia y el terrorismo. Esta conducta de renuncia y repudio explícito de las acciones violentas es consecuencia de nuestra posición humanista conjugada con nuestro respeto por el afán de paz y convivencia pacífica que anima al pueblo chileno.

En el mismo plano de aclaraciones, hay que señalar que la lucha por la liberación no es una opción preferente de nuestra parte, ya que el país se beneficiaría y distendería si prevaleciera por parte del Gobierno una actitud de apertura, diálogo o entendimiento. En otras palabras, el enfrentamiento es una opción obligada y provocada por la in

transigencia y rigidez proveniente del Gobierno.

Además, existe el problema de la concertación de estas acciones con otras fuerzas políticas de oposición. A este respecto, reiteramos la posición del Partido Demócrata Cristiano en el sentido de propender a la mayor y mas activa movilización en la base social, pero excluyendo todo acuerdo o compromiso político con movimientos o partidos que endosan o alientan el empleo de la violencia y/o las acciones terroristas.

Con estas condicionantes en su marco de acción la lucha por la liberación de la autocracia militar no debe tener descanso ejerciéndose a través de diferentes formas de expresión eficaces e impactantes.

Hasta el momento, la movilización social ha demostrado ser la forma mas dinámica, presionante y conmocionadora del régimen militar.

Las protestas nacionales constituyeron la mayor demostración del repudio popular al régimen así como la mejor herramienta de cambio al interior del Gobierno. Como resultado de las mismas se obtuvo un retorno parcial de exilados, la tolerancia de un limitado debate y actividad política y aún se llegó a activar una conducción política del Gabinete que se había despreciado por largo tiempo.

Sin embargo, es conveniente que esta forma de movilización social que son las protestas, no debiendo abandonarse, puedan y debendan pasar a otras expresiones y formas de actividad social de repudio y conmoción del régimen. Entre otros ejemplos, cabe referirse a la denuncia, el boicot y a diversas formas de paralización de actividades.

La denuncia pública es un instrumento eficaz y sustitutivo del poder fiscalizador del Congreso, de la Contraloría General de la República y de la Prensa existente en un régimen de libertades públicas.

Este procedimiento permite informar a la opinión nacional e intenta aminorar los efectos de impunidad y corrupción que se presentan en todo sistema de gobierno no sometido a mecanismos de control.

En esta materia, la DC a través de muchos de sus hombres ha ejercido una valiente acción de denuncia pública junto a otros personeros y a medios de difusión opositores.

Por todo lo señalado suscribimos la necesidad de mantener y alentar una decidida, vigilante y responsable denuncia, interna e internacional, que muestre la verdadera cara de fracaso, represión y atropello de los derechos humanos del régimen autocrático militar.

La década transcurrida acumula situaciones, actuaciones y responsabilidades que no deben sustraerse de la atención y el juicio público.

A manera de ejemplo deben reiterarse o iniciarse campañas de denuncia de los siguientes asuntos:

- responsabilidad del gobernante general Pinochet por su pertinaz apoyo a la fracasada política económica monetarista;
- defensa irrestricta de los derechos humanos;
- publicidad por parte del Gobierno acerca del monto actual y futuro de la deuda externa pública y privada y del destino y uso de estos ingentes recursos;
- rechazo de toda forma o compromiso del aval público en relación a la deuda externa privada;
- información de los resultados de investigaciones en los casos de denuncias de actuaciones que involucran a funcionarios públicos, cualquiera sea el cargo que éstos detenten;
- repudio del convenio firmado por el gobierno de Pinochet con el

FMI que sanciona y obliga a un ajuste recesivo que golpea a los trabajadores;

- exigencia de renegociación de la deuda externa pública, condicionando el nivel de pagos a la capacidad exportadora y requiriendo ampliación de los plazos y nuevas condiciones financieras para estos acuerdos;

- información acerca de los recursos financieros que traspasa el Banco Central a la banca intervenida y de los procedimientos y pasos de la comisión liquidadora de este sector bancario;

- como expresión de una indispensable y real separación de poderes entre la conducción del Estado y las tareas legislativas y constituyentes, se debe exigir la separación jurídica plena de la calidad de Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército;

- denuncia del control y manipulación de los medios de comunicación de masas que retringen el derecho a una información abierta, completa y oportuna de la ciudadanía.

Compromiso y responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el régimen:
necesidad de una interlocución cívico-militar. El rol central y decisivo de las Fuerzas Armadas en la actual situación del país así como en la posibilidad de una salida del régimen presente no puede soslayarse ni disminuirse en un análisis socio-político.

La verdad es que, al cabo de una década de régimen militar, parece llegada la hora de colocar a las instituciones armadas frente al compromiso y responsabilidad asumidos por sus altos mandos en la conducción del país y convertidos en un poder decisorio vital y en el mayor sostén del Gobierno.

En efecto, pese a la fuerte conducción personalista del régimen, el caso chileno aparece como un sistema autoritario constituido orgánicamente y respaldado por las instituciones castrenses. De este modo, la participación de las cúpulas militares en el ejercicio del poder político y la actuación de jefes castrenses en múltiples tareas de gobierno involucra a las instituciones armadas en los resultados de esta prolongada gestión.

La presencia y el peso de los mandos militares al interior del régimen se demuestra por la importante ostentación y ejercicio del Poder Constituyente y del Poder Legislativo por parte de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. Hay que recordar que esta crucial función de orientación y decisión en los destinos del país involucra no sólo los mandos supremos ya mencionados sino comprende a numerosos otros altos jefes militares que desempeñan tareas legislativas en comisiones colaboradoras del régimen jurídico presente.

Como se ha dicho, la participación militar en el régimen se ve

reforzada con la actuación de altos mandos militares en diversas labores de gobierno. En ministerios, comisiones asesoras, en la dirección de empresas públicas y autónomas y en el gobierno regional a través de intendentes, gobernadores y aún alcaldes, se aprecia una extensa presencia militar que configura un rostro castrense característico del régimen.

La verdad es que mirada en conjunto, la gravitación militar al interior del sistema es muy activa y extensa y mas real e importante que la imagen corriente e interesada que pretende presentar a las instituciones armadas como desvinculadas de responsabilidades en la conducción del Gobierno y del país.

En virtud de lo anterior las cúpulas o mandos militares aparecen convertidas en el centro de apoyo del régimen autoritario y ejerciendo un prolongado rol de intervención de la sociedad civil. En esta acción, los representantes militares evidencian e imponen su imagen del país y su visión del ordenamiento jurídico e institucional y se extienden en opiniones que respaldan hasta la acción económica del Gobierno. Esta profunda reglamentación de la sociedad y sus efectos en la vida nacional despiertan, a su vez, el derecho de la ciudadanía para expresar su visión crítica de estas actuaciones militares en el desempeño de tareas no profesionales.

La afirmación del derecho de reacción cívica frente a la participación militar en funciones superiores de conducción del Estado es ines

capable e irrenunciable.

Desde el terreno de los principios que no reconoce órdenes privilegiados en la conducción de los destinos patrios, sino adscribe la soberanía a la nación entera representada por sus ciudadanos hasta el ordenamiento jurídico del mundo civilizado que no admite prelación ni rango de autoridad suprema a las instituciones armadas en el manejo de los asuntos públicos, no existe fundamento alguno para exceptuar a las instituciones castrenses, bajo el principio de la responsabilidad del mando, del enjuiciamiento de sus actuaciones sean éstas profesionales, o, en forma excepcional, de tipo gubernativo.

En este análisis se concentra la atención en las funciones y participación militar en tareas de gobierno y legislación separándolas del juicio ciudadano relativo a su vital función en la defensa nacional. En este último plano, hay que reiterar que la Democracia Cristiana chilena adhiere, con el resto del país, en el apoyo y necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas dotadas de un alto nivel profesional, jerarquizadas y celosas guardadoras de la soberanía y respetuosas de su condición no deliberante y prescindente de las luchas políticas e ideológicas.

En este sentido, las instituciones armadas chilenas tienen una responsabilidad, importancia y valor histórico que nadie desconoce. Pero lo señalado anteriormente no conierte a estas instituciones en organizaciones superiores ni de mando permanente sobre la sociedad chilena ni con mayor responsabilidad sobre el destino nacional. Como instituciones públicas y como comunidades humanas los institutos castrenses son organizaciones integrantes y parte de la comunidad nacional y que contribuyen a la construcción de nuestro país del mismo modo que

otros órdenes espirituales.

Con estas condicionantes, y referido a la situación de hecho del compromiso y responsabilidad de las instituciones armadas en la hora actual, se formulan algunos rasgos críticos de sus actuaciones en la conducción del régimen. A lo anterior se une un fuerte sentimiento de apelación urgente a los institutos armados, convertidos en un preponderante interlocutor válido del régimen e involucrado, al igual que el resto del país, en la búsqueda de una salida de consenso que permita el anhelado reencuentro civilizado entre chilenos.

Mirada en retrospectiva, la actuación de las cúpulas militares en la conducción y decisiones del autoritarismo se concentra en el campo de los derechos humanos, los resultados económicos y el ordenamiento jurídico institucional dictado e impuesto por el régimen.

En materia de derechos humanos, el régimen militar presenta una pesada carga de violaciones reiteradas, exilio forzoso, desapariciones y muertes que comprometieron a los servicios de seguridad del régimen despertando una imagen nacional e internacional de repudio y condena unánime. Nadie puede desconocer que nuestra sociedad presenta una profunda herida y conmoción en relación a la trasgresión de los derechos humanos en este período, condición que en su momento no debe evitar ni el juzgamiento de las responsabilidades pertinentes y justas, ni la necesidad de terminar con el odio y la división entre chilenos.

En relación a la responsabilidad del régimen militar en los resultados del experimento económico monetarista, cabe destacar que esta fue una acción de inspiración y ejecutoria a cargo de un sector civil integrante del gremialismo que daba el sostén intelectual al régimen desde su inicio. Sin embargo, pese a la participación en breve período de

dos generales de Ejército en la conducción económica, fue público y notorio que las cúpulas militares y los altos mandos miembros del Gobierno ^{avalan} endosaron en forma reiterada la catastrófica política económica que apoyó en forma irrestricta el general Pinochet. Más aún, frente a las oportunas y repetidas advertencias y requerimientos de muchas voces disidentes que aconsejaban rechazar o modificar una experiencia económica que se apreciaba equivocada y cuyo fracaso comprometería la responsabilidad de las instituciones armadas, la respuesta de los mandos fue de rechazo terminante y de solemne adhesión al gobernante y al régimen en manifestaciones que sellaron la corresponsabilidad militar en el fracaso económico.

En lo relativo al rol de los mandos supremos de las Fuerzas Armadas en el dictado e imposición del ordenamiento jurídico institucional vigente apreciamos un cúmulo de actuaciones que caen directamente en la esfera política con efectos extensamente negativos sobre la imagen pública de estas instituciones.

Tal es el caso de la aprobación y promulgación de la Constitución de 1980, con especial referencia a sus dictatoriales e inflexibles normas transitorias. En el mismo sentido hay que anotar la frondosa normativa y legislación dictada en estos años cuyos ejemplos más recientes son la llamada Ley Antiterrorista que legalizó las actividades de la repudiada CNI y la aprobación de la nueva Ley de Prensa que estableció normas y sanciones intolerables para quienes denuncien actuaciones personales de funcionarios públicos.

A lo anterior hay que sumar la responsabilidad de la Junta de Gobierno en la elaboración de las llamadas leyes políticas. En este caso se da un ejemplo clarísimo de lo extremo de la intervención y del compromiso castrense en tareas de neto corte político.

En verdad, el espectáculo presente por el que el país presencia a los Comandantes en Jefe de las instituciones armadas enfrascados en decidir sobre el número adecuado de adherentes que debe tener la aprobación de un partido político o estudiando el régimen de financiamiento de las entidades políticas es un evidente exceso que no debe continuar ni menos extenderse a las restantes leyes políticas, que obligarán a los Jefes Militares a decidir sobre sistemas eleccionarios, constitución del Congreso Nacional y Tribunal Calificador de Elecciones.

La justificación de estas actuaciones bajo el imperio y mandato de las actuales disposiciones constitucionales no exime a los Jefes Militares de una falta de visión para buscar otro procedimiento de estudio y discusión previa de estas leyes por parte de los sectores directamente comprometidos. Es evidente que si, para el caso de las leyes políticas, se hubiese optado por constituir comisiones de amplia representación de gobierno y de los diversos sectores políticos que hubiesen adoptado sistemas de trabajo eficaces para alcanzar acuerdos o presentar alternativas para ser sometidas a la instancia decisiva del Poder Legislativo, los mandos militares habrían evitado la imagen de discusión cerrada, excluyente y aún no válida de las futuras leyes políticas.

Como resultado de estas actuaciones se aprecian diversos efectos negativos que comprometen las relaciones entre la sociedad civil y el estamento militar. La prolongación de la acción gubernativa y legislativa por parte de uniformados los lleva por la propia naturaleza de estas funciones a un inconveniente hábito de ejercer labores y emitir opiniones de neta índole política. Esto levanta una imagen de politización en el quehacer de amplios mandos militares que, voluntaria o invo

luntariamente, afectan la vocación institucional de prescindencia política. A este respecto, hay que denunciar que es esta práctica y ordenamiento institucional impuesto por las propias cúpulas militares lo que expone a las instituciones armadas a un repudio ciudadano. Nada se logra con la frecuente afirmación del "apoliticismo militar" que se desmiente con el cúmulo de declaraciones y opiniones en materia política en que aparecen los altos mandos militares. Tampoco es aceptable la tendencia a usar un doble estándar por parte de las jefaturas militares. Este se refiere a la enérgica condena y prohibición de toda opinión civil referida a actuaciones gubernativas o legislativas, por tanto, políticas, de representantes de las Fuerzas Armadas mientras estos guardianes celosos del pretendido apoliticismo castrense tienen amplia libertad de opinión, intervención y decisiones en materias políticas contingentes, como se ha demostrado.

Por lo dicho, parece indispensable la urgencia y necesidad de denunciar el compromiso y la responsabilidad en que los mandos militares han colocado a las instituciones armadas frente al fracaso del régimen, a su empleo como fuerza de represión y a la prolongación de su intervención en la sociedad civil. El silencio y aún la exclusión del juicio público frente a estas actuaciones militares no ha sido compensado con un beneficio, comprensión o búsqueda de flexibilidad por parte del estamento militar en sus relaciones con el resto de la sociedad. Por el contrario, en esta marginación del compromiso y del juicio público acerca de las responsabilidades de los sectores militares se aprecia una sensación de impunidad y de escape de juicio histórico, ánimo que parece haber reforzado la contumacia del apoyo irrestricto al régimen y frenado la comprensión de la magnitud del fracaso y la incapacidad de gobernar de éste. Esta actitud, sin duda, ha teni

do y tiene un peligroso efecto de endurecimiento del ánimo del gobernante y de su tendencia de preferir el enfrentamiento por sobre la concordia.

Por estas razones, las Fuerzas Armadas en esta hora deben convertirse más que nunca y tomar conciencia de su papel de interlocutor válido y fundamental en la búsqueda de una solución de salida pacífica, de término de la división entre chilenos y de reencausamiento histórico del país. En este sentido, no se compromete ni la razón ni la legitimidad en una apelación frontal clara e intensa de parte civil para alcanzar una interlocución con los responsables autorizados de estas instituciones, bajo la urgencia del grave momento histórico que se vive y la esterilidad y peligro de enfrentamiento a que se expone el país caso de continuar bajo la fuerza el fracasado régimen autoritario del general Pinochet.

En síntesis, el país tiene derecho a señalar, respetuosa pero decididamente, la responsabilidad y compromiso de las Fuerzas Armadas en la grave crisis que vivimos; a alertar la inconveniencia de prolongar la intervención militar en el manejo del país por su riesgo de politización y rechazo ciudadano y a pedir una recuperación e interlocución cívico-militar que permita un gran acuerdo nacional que, sin pérdida de nuestra convivencia y sin violencia, vuelva a Chile al ámbito de las naciones democráticas, civilizadas y respetables.

Valor y urgencia de una interlocución civico- militar para un Acuerdo Nacional. Hemos abundado en la conveniencia de reemplazar la intervención por una interlocución cívico-militar.

La frecuente reacción de extrañeza cuando no de rechazo, o la más inaceptable demanipulación, de una petición de diálogo cívico-castrense demuestra el peligroso distanciamiento a que se ha llegado entre las civilidad y las instituciones armadas.

Reiteramos que resulta indispensable focalizar una importante área de acción política futura ~~con~~ centrada en romper este tenso y negativo aislamiento de estos importantes sectores de la vida nacional.

A quienes se oponen a cualquier contacto entre grupos representativos de amplio sectores sociales y los mandos militares les recordamos que en el mundo actual la relación de las instituciones castrenses con el resto de la sociedad exige y presenta hoy un elaborado pero fuerte grado de contacto de sectores civiles y militares. Tal es el caso de las democracias más fuertes del mundo que sostienen los sistemas militares igualmente más poderoso. Pero en estos casos de sociedades avanzadas los sistemas militares no se han desarrollado con aislamiento o separación del aporte humano, económico, científico- tecnológico ni político que el resto de la sociedad presta a sus fuerzas armadas.

Todas estas razones abonan el trabajar entre nosotros por abrir un progresivo entendimiento cívico-militar que, sin romper la verticalidad del mando, permita una reconciliación social y una reconstrucción pactada de tipo jurídico-constitucional que resulte impostergable.

La base de partida es aceptar la comunidad de destino que compromete a todos los chilenos.

Luego debe seguir la apertura de los espíritus a través de una nueva actitud de tolerancia y comprensión mutua.

Hay que reconocer que cada parte tiene puntos de vista, visiones y aún una estimación de peligros frente al destino patrio que son respetables, pero que no deben imposibilitar la comunicación. Si cada sector se preocupa de una cuidadosa consideración y estudio de la posición de la otra, sin vetos ni exclusiones previas, sin sometimiento ni subordinación de ninguna especie, se estará en un camino de reencuentro civilizado que la inmensa mayoría del país apoyará decididamente.

Con paciencia, mente abierta y preocupación superior en el destino nacional se podrá desarrollar desde los primeros pasos hasta la maduración de una convivencia y comunicación entre el estamento militar y la civilidad que de frutos de esperanza y de solución pacífica a los graves problemas actuales.

El establecimiento de los canales de comunicación más adecuado para esta interlocución cívico-militar que requerimos será una materia delicada y decisiva, pero que no debiera consumir la posibilidad de un resultado positivo.

En este aspecto, hay que recordar que en diversos regímenes militares de otros países que resolvieron por la vía de la negociación una salida que evitó el enfrentamiento, siempre se dieron los pasos y facilidades por parte de las fuerzas armadas para establecer vías de comunicación y una interlocución válida con la civilidad.

En muchos de estos casos, la conducción de este diálogo se canalizó o estimuló desde la dirección política del gobierno, o bien se realizó en diversas formas de contacto con los mandos supremos de los institutos armados.

Creemos que entre nosotros resulta crucial y un requisito previo contar con una actitud receptiva y favorable del regimen militar para un encuentro pacífico con la civilidad que se debe evidenciar en la utilización de todas las vías posibles de comunicación.

Por lo anterior consideramos indispensable expresar la conveniencia de que la jefatura política del gobierno sea ejercida por una persona que tenga el pleno respaldo de las instituciones armadas junto a una profunda convicción de la necesidad y conveniencia de una interlocución cívico-militar.

Perseverar en otro tipo de conducción política, sólo acentuará la opción de enfrentamiento que el país rechaza y postergará la anhelada salida pacífica.

Colocados en este contexto, se podrá dar ~~plazo~~ a la consideración de las fórmulas concretas que podría adoptar, a través del diálogo cívico-militar, el gran acuerdo nacional que todos esperan.

A este respecto, y como una base de partida, suscribimos las proposiciones y planteamiento hechos públicos por el ex-Presidente del Senado don Patricio Aylwin con fecha reciente.

Las sugerencias a ~~que~~ nos referimos creemos que satisfacen con amplitud y realismo político la necesidad de sortear obstáculos y evitar condicionantes insalvables en la obtención de una salida jurídico-política que, fundada en un acuerdo cívico de requisitos mínimos pero fundamentales, se concierte con las fuerzas armadas y sea ratificado por el pueblo chileno.

Vivir el destino del pueblo. Creemos que esta es una gran tarea futura de la Democracia Cristiana, que corresponde a su vocación de servicio y de respeto por la dignidad humana.

La exigencia de actuar frente a las críticas condiciones de vida de millones de compatriotas es inescapable.

La existencia de la dictadura es un hecho brutal que ha castigado a los trabajadores, cerrado el futuro a la juventud, ahondado la división social y multiplicado la marginación cultural.

Numerosos estudios marcan nuestro peligroso proceso actual de desintegración social, de apatía cultural y disociación familiar a lo que se añade los problemas psicológicos de la pavorosa cesantía.

Como efectos constatables de esta decadencia general que afecta al cuerpo social ya no somos una nación unida e integrada. El individualismo y la protección del núcleo personal parece haber reemplazado a la indispensable solidaridad y sentido comunitario requerido en toda nación fraterna.

Frente a este azote social provocado por el fracaso económico y social de la autocracia el pueblo chileno no puede vivir este negro período aislado, sin voz y sin instancias de representación y de lucha por solucionar sus problemas.

Por estas razones, creemos que la Democracia Cristiana debe apoyar y vivir junto al pueblo la dramática realidad de la hora presente.

Nuestra integración y vivencia común emana de nuestra condición multclasista de nuestros militantes. A través de nuestros trabajadores, pobladores, mujeres, estudiantes, profesionales, técnicos e intelectuales los Democrata Cristianos podemos contribuir a la experiencia, estudio, solución y representación de respuestas concretas ante tanto problema

acumulado por una década de empobrecimiento.

Esta actitud de "respuesta ahora" a las necesidades vitales de vida de los pobres y de los postergados debe movilizar todos los estratos partidarios en una contribución eficaz y activa.

Los profesionales y técnicos deben redoblar su análisis, denuncia y recomendaciones de cambio de las condiciones que se aprecian en las distintas áreas sociales y económicas. Desde la vivienda a la urbanización; desde las obras públicas hasta la agricultura; desde la educación a la intervención de las universidades se debe presentar los resultados de la experiencia de la década autoritaria, presentar soluciones y exigir respuesta de la autoridad.

Los dirigentes sindicales, que han dado tanto ejemplo de sacrificio, liderazgo auténtico y espíritu de lucha por la liberación nos han señalado un extenso y profundo camino de reivindicaciones que suscribimos ampliamente.

Las mujeres seguirán representando el sostén de la vida familiar y las testigos y jueces más descarnados de esta experiencia devastadora.

Los jóvenes continuarán siendo la mayor expresión del afán libertario y de exigencia de cambio.

En todas estas instancias el aporte del Proyecto Alternativo del PDC será fundamental. En este sentido, creemos conveniente que, sin perjuicio de mantener la preocupación por la alternativa para la etapa democrática, se reorienten los estudios técnicos hacia la coyuntura.

En suma, se trata de anteponer por parte de la Democracia Cristiana toda actitud de interés político futuro para dar, una vez más, un testimonio de nuestra capacidad de respuesta y servicio de las necesidades populares actuales.